

En este número

La movilización de los maestros mexicanos de educación básica por la defensa del salario y la democracia sindical constituye la más importante acción realizada por los trabajadores del país durante los últimos años. Desde que los trabajadores electricistas agrupados en la Tendencia Democrática desplegaron una intensa lucha sindical en los primeros años de la pasada década, ningún movimiento de los asalariados había alcanzado la extensión, la resistencia y la combatividad de la movilización magisterial, desarrollada desde junio de 1979.

A pesar de la resistencia que se le ha opuesto, el movimiento ha alcanzado victorias iniciales, si bien modestas. Logró una mejoría salarial ligeramente arriba de los topes oficiales y abrió brechas en un sindicalismo oficial que parecía impenetrable. Pero no estamos hablando de un proceso terminado, sino de una acción inconclusa, cuyas nuevas manifestaciones ya se están anunciando. El resultado final es incierto; tal vez el movimiento sea contenido en espacios estrechos y anulado por la negociación de concesiones marginales; la fuerza de la burocracia sindical es todavía considerable y la represión, ejercida por diferentes vías, es siempre una solución probable. O tal vez logre consolidarse y extenderse a regiones del país que no han sido tocadas y, en una larga batalla de posiciones, recupere la condición clasista de la organización sindical. O tal vez, aún, se convierta en un catalizador de otras acciones de los trabajadores y se integre a una vasta movilización, con objetivos económicos y políticos coincidentes.

El informe de María de la Luz Arriaga que cierra este número, revisa de manera sistemática el recorrido del movimiento magisterial desde sus primeros brotes, en el verano de 1979, hasta su repliegue temporal en febrero de 1981. Reconstruir los rasgos esenciales de la compleja historia de 20 meses de lucha no es tarea sencilla; es fácil sobreestimar los momentos más visibles del movimiento, las marchas nacionales con decenas de miles de participantes o los "plantones" frente a la Secretaría de Educación Pública, dejando de lado los procesos locales de organización y movilización inicial, de los cuales las acciones en el Distrito Federal no son sino consecuencia.

El trabajo de Arriaga Lemus atiende al desenvolvimiento de estos conflictos regionales, cada uno generado por una dinámica específica, y por eso puede poner en claro dos de las características centrales de la lucha magisterial: por un lado, el encadenamiento y profundización progresiva de sus demandas, desde la protesta por el retraso de pagos, a la demanda de aumento salarial, a la exigencia de la democratización sindical y la autonomía de sus órganos de base, hasta la denuncia de la política del Estado hacia los trabajadores; por el otro, el desplazamiento de la vanguardia de una región a otra, conforme maduraban las condiciones del conflicto y se acumulaban las fuerzas en cada una de ellas: primero las secciones sindicales de Chiapas, luego Oaxaca, después Morelos, para arribar al principio de este año a la confluencia de Guerrero, Hidalgo y la zona metropolitana del estado de México.

La lucha magisterial es una experiencia de los trabajadores que no se ha analizado suficientemente. Los partidos de la izquierda y el conjunto de las fuerzas democráticas deben recuperar para su memoria política las particularidades del movimiento, que ha sido en su esencia una acción de masas de un alto grado de espontaneidad, con una participación secundaria y a veces inadecuada de las corrientes partidarias. El material presentado por Arriaga Lemus, junto con todo lo que ha sido escrito sobre el movimiento, permite preguntar y ensayar líneas de respuesta sobre cuestiones fundamentales sobre el carácter del profesorado como sujeto de la lucha social; sobre la potencialidad y las limitaciones de las formas de organización que se fueron desarrollando; sobre las vinculaciones reales y posibles del movimiento con las organizaciones de los trabajadores, los partidos y los sectores populares; sobre la respuesta del gobierno, del aparato sindical y el conjunto de la clase política.

La primera pregunta, la elemental, ¿por qué los maestros? Para muchos fue sorprendente que, en el conjunto de los asalariados, fueran los profesores de educación básica los primeros en movilizarse. Hay un difundido lugar común que los considera uniformemente como un estrato relativamente privilegiado de los trabajadores al servicio del Estado, irremisiblemente capturados en la rutina burocrática y en las aspiraciones consumistas satisfechas a medias, como "pequeña burguesía" alejada de las masas populares. Y sin embargo, son ellos los que se mueven. Es cierto que el movimiento se remite a dos causas genéricas: el deterioro del salario real, estimado en 20% entre 1976 y 1980 y la incapacidad del SNTE para encabezar cualquier demanda que desborde la política salarial del Estado. Sin embargo, ello no constituye una explicación suficiente de la movilización; los demás asalariados del sector público

están sujetos a condiciones semejantes y otros trabajadores han sido más duramente afectados por la crisis económica, sin que, hasta hoy, se haya agudizado su capacidad de respuesta política. Por ello, la explicación completa hay que buscarla en características específicas del sector de profesores que efectivamente se ha sumado a la disidencia sindical.

Para empezar, hay que señalar que el profesorado de educación básica no constituye un estrato homogéneo de asalariados, sino un conjunto altamente estratificado, en el que existen hondas diferencias de nivel salarial y régimen laboral. Es cierto que un segmento de maestros ubicado en las grandes localidades urbanas trabaja en condiciones favorables. Por su escolaridad más prolongada, por antigüedad y promoción escalafonaria o por relaciones personales y experiencia política, tienen acceso a los puestos mejor pagados, a la vasta red de la administración escolar o al recurso de las comisiones sindicales. Hacia abajo, la situación laboral se hace cada vez más precaria, hasta alcanzar a la gran masa de profesores de localidades rurales y semiurbanas, con ingresos considerablemente menores, escaso acceso a servicios y prestaciones, particularmente afectados por la ineficiencia burocrática y sujetos a las más difíciles condiciones de trabajo.

Importa hacer esta distinción porque el movimiento se ha generado y obtenido su apoyo fundamental en estados de la República en los que predominan los profesores no urbanos, con una alta proporción de personal con menos de 10 años de servicio, en localidades dispersas en las regiones más pobres del país. En 1970, Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo eran las entidades con el sistema de educación básica más deficiente del país, muy por abajo de las necesidades mínimas de su población. Sólo Morelos contaba desde antes con un sistema básico relativamente desarrollado.

Es válido suponer que en las regiones mencionadas, con la excepción dicha, una buena proporción de los profesores eran jóvenes que trabajaban en condiciones precarias, pero ello no era su única peculiaridad. Estaban ubicados en zonas campesinas, con una alta densidad de población indígena, en donde la miseria y la explotación más aguda habían generado diversas formas de lucha y resistencia, represión y violencia institucionalizada. En el Valle de México, con otras características, existe también una situación social conflictiva, por la combinación de luchas obreras y poblamientos marginales, en constante movilización por la tierra y los servicios urbanos. Ello determina una fuerte vinculación de los profesores con las condiciones de vida de las masas explotadas, que en buena parte eran sus propias

condiciones. Mas aún, en gran parte de los casos, el profesor no era un elemento externo que se hubiese integrado a un ambiente nuevo, sino que provenía de origen de ese mismo ambiente. Así fue posible el resurgimiento de una vieja tradición combativa, de una ideología popular del magisterio que había sido marginada, pero sobrevivía en instituciones como las normales rurales. En conjunto, estos elementos contribuyen a hacer comprensible una movilización que sería improbable desde una perspectiva rígidamente clasista de la lucha social.

Un segundo campo de reflexión es el de las formas de organización adoptadas por el movimiento, porque ejemplifican la potencia y la riqueza que puede generar la autoorganización de los trabajadores en Lucha, pero también sus limitaciones cuando se requiere una dirección conjunta, con visión global y anticipada de los procesos y capaz de rápidas decisiones en condiciones extremadamente fluidas.

El movimiento tiene entre sus más profundas peculiaridades el que se genera y organiza desde la base, a partir de iniciativas locales en las escuelas y delegaciones más activas, que se van extendiendo a otros centros a través de la apretada red de comunicación e interacción gremial. En cada región se desarrollan centenares de microluchas con la burocracia sindical y administrativa, en un acelerado proceso de acumulación de fuerza, que llevó a la creación de organismos provisionales de coordinación y desembocó después, con la excepción de Oaxaca, en la forma típica de dirección: el Consejo Central de Lucha.

Como órganos regionales, los CCL han sido de gran eficacia. Montados sobre una red molecular de grupos de base, aseguraban la representatividad y la transmisión bidireccional de iniciativas y acuerdos. Formados por delegados sustituibles, no se cristalizaron ni distanciaron de los militantes y permitieron la acción abierta de las corrientes políticas que actuaban en el interior del movimiento. Es cierto que a veces las deliberaciones y las decisiones eran lentas y que aparecían pugnas sectarias de diverso tipo, pero todo se compensaba con la capacidad de movilización y concentración, con la autoridad que fueron ganando los consejos.

Cuando el movimiento se extendió desde su foco inicial en Chiapas y se abrieron frentes en otras

entidades, se creó la Coordinadora Nacional,^{*1} en diciembre de 1979. Durante los meses siguientes, será la CNTE la que asuma la dirección conjunta del movimiento y decida las acciones concertadas en los periodos de alza. Crearla significó un enorme avance organizativo, pero diversos factores limitaron su capacidad de liderazgo efectivo. Ha sido más una asamblea de delegados de consejos y corrientes, lo que siempre planteó un problema de representatividad y peso relativo en su interior y abría el riesgo de la pulverización grupuscular. Por otro lado, no integró a la totalidad del movimiento. Oaxaca se mantuvo en una ambigua posición de "observador" y la dirección de Chiapas se marginó de hecho, manteniendo una línea propia que la llevaría objetivamente a romper la unidad del frente en los días críticos de febrero de 1981.

Un problema siempre presente fue el de la relación entre la dirección de los movimientos regionales, las corrientes de partido (MRM, COSID y CS) y las tendencias antipartido (Línea Proletaria y grupos maoístas, el más importante FMIN). La pugna recurrente respondía a la extendida desconfianza de los profesores hacia los grupos abiertamente políticos, estimulada por acciones de secta de los antipartidarios, pero estaban también presentes errores tácticos de las corrientes de partido y su incapacidad de actuar consistentemente, pero disueltas dentro de los movimientos regionales. El hecho es que, al margen de las directrices generales acordadas por la CNTE, las corrientes más importantes y los propios consejos conservaron su capacidad de lanzar iniciativas propias.

En balance, la Coordinadora pudo actuar con eficacia cuando se trataba de concertar acciones conjuntas e inmediatas o para unificar demandas, pero no tenía la estructura adecuada para actuar como dirección política en un sentido más amplio, para anticipar el desarrollo probable de los acontecimientos, prever las reacciones gubernamentales y de la burocracia sindical, concertar alianzas y apoyos, en fin, para desarrollar una estrategia de largo alcance, que superara las acciones puramente tácticas.

Por sobre los aciertos y limitaciones de los órganos de dirección, lo que destaca como esencia del movimiento es la acción de sus bases. En esta afirmación no hay ningún presupuesto espontaneísta, sino la constatación de un hecho. Una y otra vez, en los momentos de gestación, despliegue o re-

1* Formalmente **Coordinadora** Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del SNTE.

troceso, los militantes dieron testimonio de su capacidad e imaginación para actuar y de una gran resistencia para sostenerse cuando las condiciones eran especialmente adversas.

La movilización involucró profundamente a todos los participantes en el movimiento. Nunca se dio el esquema de una dirección activista y una base estática de apoyo, sino el de acciones colectivas que se concatenaban. Primero la organización de los núcleos disidentes y la constitución de una corriente regional y luego el paso decisivo de la toma de las escuelas y el lanzamiento del paro, cuando nadie podía saber si se lograría un respaldo extenso o si los huelguistas quedarían aislados y expuestos a la represión. Defender la huelga implicó el doble esfuerzo de explicarla a la comunidad y crearle apoyo externo, mientras se luchaba no sólo contra el oficialismo sindical y los funcionarios de educación, sino también contra las autoridades políticas y caciquiles, los efectos de los llamamientos de la SEP a proteger el interés de los niños y las campañas de amedrentamiento y desprestigio lanzadas por los medios masivos, de las cuales la desarrollada en el Estado de Morelos fue el caso extremo.

El curso de las movilizaciones regionales mostró, en todos los casos, que la acción local era insuficiente y que era necesario recurrir a la presión directa en la capital del país. Ello dio origen a otras formas de lucha, la caravana, el "plantón" frente a la SEP, las grandes manifestaciones callejeras, significaron una profunda experiencia política para decenas de miles de maestros. Actuar en un medio extraño, enfrentarse al desalojo policiaco y a la constante amenaza de la represión, organizar la existencia cotidiana de masas concentradas durante prolongados periodos, discutir y decidir colectivamente en una situación cambiante, fueron factores de un intenso aprendizaje que fortaleció la cohesión del movimiento y fogueó a centenares de dirigentes.

Frente a la capacidad de movilización, está siempre presente la limitación más fuerte de la acción de los maestros: su esencial aislamiento de las organizaciones de los trabajadores y de los movimientos populares. En sus regiones de origen, la mayor parte de los movimientos conquistó en diverso grado el apoyo de las comunidades. En Morelos la solidaridad de padres de familia y núcleos campesinos fue común; en el Valle de México hubo zonas en las que se logró una estrecha fusión con grupos obreros y agrupaciones de colonos. Sin embargo, en las acciones de alcance nacional la situación fue otra. Ninguna gran organización sindical o popular actuó en apoyo de los

disidentes o enarboló demandas propias que coincidieran con las del magisterio. Ciertamente, el sindicalismo independiente manifestó su solidaridad, pero ésta tuvo escasa eficacia política, sea porque los núcleos solidarios eran pequeños o porque se encontraban en un proceso de debilitamiento, como fue el caso de los trabajadores universitarios. Otras posibilidades de vinculación fueron liquidadas por el oportunismo; el más claro ejemplo de ello se dio a principios de 1981, cuando la Unidad Obrera Independiente, fuerte central no oficial, manifestó su apoyo al movimiento, pero al mismo tiempo intentaba someterlo a sus propias líneas. La exigencia de la UOI de expulsar a los comunistas y su llamamiento a una marcha conjunta al Zócalo sin consulta con la Coordinadora, despertaron un fuerte rechazo y frustraron una confluencia que, en principio, ofrecía enorme potencialidad.

Por el lado del sindicalismo oficial, la reacción fue ratificar su apoyo total a Vanguardia Revolucionaria, el grupo hegemónico del SNTE y calificar al movimiento como antinacional y guiado por oscuros motivos políticos. A finales de 1980, ante la extensión de la disidencia, la dirección del Congreso del Trabajo hizo pública su condena a la movilización, secundada por 150 diputados del PRI, quienes incluso solicitaron una investigación sobre el origen de la agitación. Al agruparse en torno a la burocracia del SNTE, el sindicalismo oficial no sólo defendía a uno de sus pilares, sino que se protegía también de la posibilidad de contagio, en especial en las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado. A fin de cuentas, los mecanismos de control funcionaron y se mantuvo la inmovilidad de las grandes agrupaciones obreras.

Es esa la cuestión que definirá el futuro del movimiento Magisterial. Si el aislamiento se mantiene, las posibilidades de la lucha gremial son limitadas. Aunque la disidencia se extienda, su avance será precario y estará sujeto al riesgo del retroceso; es improbable que por sí sola logre desbordar la política salarial impuesta por el Estado y romper el corporativismo sindical, instrumento esencial de la estabilidad del sistema. Sin embargo, la frecuencia cada vez mayor de las movilizaciones de los trabajadores y diversos sectores populares apunta la posibilidad de confluencia de masas en torno a objetivos comunes de política económica y de democratización de las organizaciones sociales. En esta perspectiva, la acción de los maestros ocupa un lugar fundamental.